

Caso Valdez: ¿Por qué tardan tanto en atacar la impunidad?

Más que su detención, lo que sorprende en el caso del alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, acusado de encabezar una organización delictiva de lavado de activos y narcotráfico, es la excesiva y sospechosa tardanza en hacerlo.

En el fondo, persiste un arraigado entramado de indolencia por parte de muchas autoridades, lo que promueve un círculo vicioso de impunidad y corrupción. Así, al postergar o desvirtuar la administración de justicia, se desmotiva a los litigantes que legítimamente exigen sus derechos, en tanto que el Poder Judicial se desprestigia aun más, con gravísimo daño para la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

En el caso de Valdez, como antes en el de Zevallos, han tenido que pasar muchos años para llegar a la denuncia y la detención. Ello, a pesar de contundentes evidencias que lo señalan como el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, quien ventiló sus vínculos con el narcotráfico. El Comercio bregó

duramente por el esclarecimiento de este crimen, que aún sigue impune. Y es que por mucho tiempo se permitió que Valdez no solo amasara inmensas fortunas de dudoso origen sino que escaló a importantes cargos públicos como la alcaldía, con lo que ejercía enorme poder para amedrentar a jueces y fiscales.

Afortunadamente, hay instancias y personajes aislados que sí asumen seriamente sus deberes y con quienes la sociedad tiene

Hay buenas piezas, pero se ven impedidas de avanzar porque el resto del engranaje no funciona, obstruye o se colude con las mafias

una enorme deuda. Allí están la procuradora Sonia Medina, la misma que anteriormente tuvo a su cargo la acusación contra otro capo del narcotráfico como Fernando Zevallos, y que ahora ha tomado a cargo la denuncia contra Valdez; la fiscal Luz Loayza;

yentidades como la Dirandro y la Unidad de Investigación Financiera, que han sido cruciales en la lucha contra esta lacra.

Pero, reiteramos, se trata de piezas aisladas que trabajan bien, pero que muchas veces se ven impedidas de actuar y que el resto del engranaje no funciona bien, obstruye su labor, o peor aún, se colude con las mismas mafias delincuenciales, lo que es realmente absurdo, traicionero y malsano.

Esta grave realidad debe ser tomada en cuenta por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, a la hora de replantear la lucha anticorrupción, que es uno de los graves retos de su gestión. No se trata solo de hacer una reingeniería del sector Interior y del sistema de procuradurías, sino de coordinar estrechamente con las cabezas del Poder Judicial y del Congreso, para que, con estricto respeto de sus autonomías, sean igualmente autocríticas y propongan medidas radicales y efectivas para derribar esas estructuras de impunidad, con firmeza, agendas y plazos impostergables. ■■

UN DEBATE QUE DEBE SER ALENTADO

Perú: territorio libre de transgénicos

Martha Meier M.Q.
Ecóloga



¿Qué tienen en común el príncipe Carlos de Inglaterra y la ingeniera agrónoma ayacuchana Juana Huancahuari, congresista por el Partido Nacionalista Peruano?

¿En qué coinciden el notable chef peruano Gastón Acurio con la doctora Jane Goodall, etóloga y primatóloga que ha investigado por décadas a los chimpancés y babuinos de Gombe, Tanzania?

Estas personalidades tan disímiles, de canteras ideológicas diversas y distantes, extrañas las unas de las otras, de distintos países y diferentes especialidades están convencidas de que los cultivos y alimentos genéticamente modificados (GM), o transgénicos, no son una solución y si no más bien un nuevo problema para la salud humana, para el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible.

En días recientes la parlamentaria, ingeniera Juana Huancahuari anunció que impulsará un proyecto de ley que declara al Perú país megadiverso, natural, orgánico y libre de productos transgénicos. Esto –según explicó– para “proteger la diversidad de especies, de recursos genéticos, de ecosistemas y de culturas del país, que permite ofrecer al mundo productos orgánicos y naturales”. La iniciativa apunta a que se derogue toda legislación que bajo la falsa premisa de la “bioseguridad” permita y promueva el cultivo e importación de transgénicos en el Perú.

Y la cosa es para tomarla en serio. En el ADN de las semillas transgénicas se han introducido genes extraños a la especie original. Así, por ejemplo, virus y bacterias (en ocasiones también modificados genéticamente) que jamás formaron parte de la dieta humana ingresan en la cadena alimenticia y en los sistemas agrícolas. Como si esto no fuera

suficiente, se está cruzando la barrera impuesta por millones de años de evolución que separa a las especies vegetales de las animales. Hoy por hoy, genes de polillas o de pescados se empezian a introducir en tomates, fresas y una variedad de cultivos pretendiendo hacerlos más resistentes o productivos.

Gastón Acurio, destacado chef, investigador culinario y exitoso empresario, ha venido pronunciándose abiertamente en contra del ingreso de transgénicos al Perú. Ha puesto énfasis, además, en la ventaja comparativa de nuestro país como productor agrícola orgánico. En una entrevista concedida a RPP, repitió lo que ya había afirmado en la revista Somos: “La agricultura transgénica no es conveniente para la economía del Perú porque la naturaleza del Perú es una naturaleza de gran biodiversidad que le permite convertirse en la gran marca de productos orgánicos en el mundo y los productos orgánicos tienen un valor agregado, lo transgénico es para otro tipo de geografías y de climas”. Recordemos que en el Perú se dan variadas especies utilísimas para la industria, la alimentación y la salud (baste poner un par de ejemplos: la uña de gato, potente antiinflamatorio y anticancerígeno comprobado, o el camu camu, con un contenido de vitamina C, 60 veces mayor al del limón).

Esta posición no debe verse como un cargamontón contra la investigación científica o el desarrollo tecnológico, sino todo lo contrario. Se trata simplemente de generar debate sobre el tema y brindar información oportuna a la población. Lamentablemente, los promotores de las semillas se han encargado de inclinar la balanza informativa hacia sus intereses con cuatro temas debatibles, discutibles y rebatidos por la propia data existente: seguridad, mayor productividad, mayor resistencia y posibilidad de erradicar el hambre.

“La respuesta es simplemente no”, dijo el profesor Robert Watson cuando se le preguntó si los transgénicos podrían resolver el hambre mundial. Watson ha sido director del más grande estudio sobre el tema, realizado a lo largo de cuatro años y revisado por 400 expertos. Esta es la conclusión de un especialista que ha estado vinculado al Banco Mundial, a la Casa Blanca y que actualmente es científico en jefe del Departamento para el Medio Ambiente, Alimento y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra, por sus siglas en inglés).

Los transgénicos no resuelven el hambre y tampoco mejoran la productividad. Los datos demuestran que la soya modificada produce 10% menos que su equivalente no alterada. En abril de este año la Universidad de Kansas publicó los resultados de un estudio de tres años, realizado en el cinturón cerealero de Estados Unidos, que da cuenta también sobre la menor productividad del maíz, el algodón y la canola transgénica, con relación a sus similares naturales. Lo que confirma varios los resultados de estudios anteriores: el de la Universidad de Nebraska (2007) y del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos (2006).

El pasado 2 de octubre, el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, tildado de “ignorante” y “lúdico” por su defensa de la agricultura orgánica, se refirió, una vez más, a su preocupación por los alimentos y cultivos transgénicos. Fue durante la conferencia en memoria del fundador del movimiento de agricultura orgánica, Sir Albert Howard (1873-1947).

Explicó el príncipe que “la evidencia hasta el momento es que los rendimientos de los llamados ‘supercultivos’ son generalmente más bajos que sus contrapartes convencionales”. Se refirió también al reporte del profesor Robert Watson que “lejos de abogar por los cultivos genéticamente modificados como una solución al hambre mundial, arguye a favor de más aproximaciones orgánicas, expresando una particular cautela sobre la concentración de la propiedad de los genes en las manos de unas pocas compañías”.

Las compañías aludidas son, sin duda, Monsanto, Aventis, Syngerti, Dupont y Dow, que controlan el 85% de los alimentos a través de semillas, pesticidas y fertilizantes. En la actualidad Monsanto controla cerca del 90% de las semillas transgénicas. Junto a Dupont y Syngenta controla el 39% del mercado mundial de todo tipo de semillas y el 44% de semillas “patentadas”. No son una solución para el hambre global ni aumentan la productividad de los campos. ¿Qué hay de su seguridad para la salud?

Jon Tester, senador por Montana ante el Congreso de Estados Unidos, ha dicho: “La agricultura debe ser sostenible, el alimento sano y seguro y la gente tiene el derecho de saber qué es lo que está comiendo”. Tester está en una batalla por lograr que en su país los alimentos transgénicos sean, por lo menos, etiquetados para que el consumidor conozca qué virus, bacteria, o gene de polilla se está llevando a la boca.

Sobre la inseguridad de estos alimentos se ha referido extensamente Jeffrey M. Smith en sus libros “Seeds of Deception”, y “The Genetic Roulette”. Smith es director ejecutivo del Instituto para la Tecnología Responsable, miembro del comité de Ingeniería Genética del Club Sierra, la más antigua, grande e influyente institución conservacionista de Estados Unidos, y autor y conferencista especializado en el tema de los transgénicos. Presentó ante la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés) un extenso informe sobre los peligros para la salud inherentes a los transgénicos. Allí cita inclusive un estudio de la propia Monsanto sobre su maíz Mon Bt 863 que reporta signos de toxicidad en hígado y riñones de las ratas alimentadas con tal producto. Según Smith, los transgénicos no son seguros y están vinculados a cientos de reacciones tóxicas y alérgicas, miles de casos de esterilización, enfermedad y muerte en ganado y daño a virtualmente todo órgano y sistema de los animales estudiados en laboratorio.

Expertos británicos del Comité Asesor del Gobierno en Ali-

mentos y Procesos Novedosos lanzaron una alerta sobre los cultivos en Estados Unidos y partes de Europa que contienen un gen resistente a los antibióticos. Hay inquietud de que esta característica pueda transmitirse al ser humano. En una nota del diario londinense “Daily Mail”, se hace referencia al microbiólogo John Heritage, uno de los expertos del comité, quien ha escrito a las autoridades americanas sobre esta preocupación. “Aunque el riesgo es pequeño –indica– son enormes las consecuencias de una infección potencialmente letal e incontrolable, propagándose entre la población”.

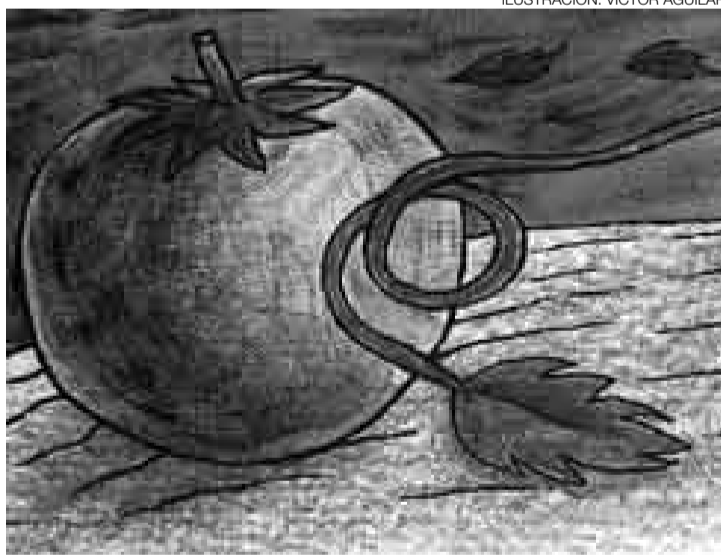
La reconocida doctora Jane Goodall publicó hace un par de años el libro “Cosecha de esperanza, una guía para un comer consciente”, en el que advierte sobre los peligros de los alimentos transgénicos y la desaparición de la diversidad de las semillas.

En una entrevista radial en el programa “Democracy Now”, Goodall explica que a la fecha no se puede predecir su efecto acumulativo a largo plazo en el ambiente o en nuestra propia salud. Explicó que los propios animales rechazan los transgénicos y citó el caso de ratones de laboratorio que debieron ser alimentados con bombas estomacales para lograr que ingirieran los tomates genéticamente modificados que despreciaban.

La Asociación de Exportadores, ADEX, ha señalado mediante comunicado que “es prematuro abrir las puertas en nuestro país a los cultivos transgénicos pues aún no se ha medido su impacto en nuestra biodiversidad... por lo que es necesario un estudio de los beneficios o perjuicios que podrían traer...”. Un país libre de transgénicos es lo que dicta la razón. En este contexto vale la pena recordar las palabras del brillante intelectual Umberto Eco, en su artículo “El Mago y el Científico”. Dice Eco: “Los hombres de hoy no solo esperan, sino que pretenden obtenerlo todo de la tecnología y no distinguen entre tecnología destructiva y tecnología productiva”. A buen entendedor, pocas palabras... ■■

“No son una solución para el hambre ni aumentan la productividad de los campos. ¿Qué hay de la seguridad para la salud?”

ILUSTRACIÓN: VÍCTOR AGUILAR



rincón del autor

Hugo Guerra



No olvidemos que quienes interceptan las comunicaciones para denunciar la corrupción no son necesariamente moralizadores. También son delincuentes

La extorsión del ‘chuponeo’

Quizá usted no sea plenamente consciente, querido lector, pero todos estamos siendo extorsionados por fuerzas extrañas que utilizan como instrumento de presión los infames ‘chuponeos’.

El país vive en vilo a raíz del escándalo de corrupción. Primero, porque con el destape cayó nada menos que el Gabinete Del Castillo. Y luego porque se amenaza con que saldría a la luz más información en cualquier momento.

Es comprensible que una primera reacción sea de simpatía para quienes proveen esos audios. Sin embargo, el hecho de que se consigan por medios ilícitos es grave. Una de las garantías constitucionales más preciadas es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones porque así se protege la intimidad. Que alguien acceda de forma no autorizada a lo que decimos de manera privada es delito tipificado.

Es verdad que cuando se tra-

ta de personajes públicos, la privacidad es más restringida. Y es cierto también que a propósito de las investigaciones en torno al montesinismo, el TC validó la calidad probatoria de audios, videos y documentos ilegalmente obtenidos cuando conducen a esclarecer casos de corrupción.

Pero esa excepción no puede aceptarse como norma regular, porque supondría permitir un sistema salvaje donde algunos podrían instaurar la extorsión.

Por supuesto, quienes tienen interés en ese tipo de delitos buscan desestabilizar el país o atacar a quienes compiten con ellos precisamente en la corrupción. En el caso del contrato petrolero de Discover, por ejemplo, ¿acaso las fuentes que proveyeron a la prensa de los audios malditos realmente querían moralizar?

La impunidad de ‘chuponeadores’ se escuda en la prensa para amplificar torvos intereses. Los manipuladores consiguen que los periodistas publiquen las denuncias, pero sin permitirles revelar el origen de los materiales ilegalmente obtenidos.

Así, los medios funcionan por un lado como fiscalizadores, pero por otro terminan involuntariamente como cómplices de ‘fantasmas’ que tienen la capacidad de bajarse a un Gabinete. Frente a esto se plantea un dilema: si la prensa no publica lo que le dan, no cumple con cautelar el interés público. Y si publica, es parte de una cadena siniestra.

Mientras ese proceso envilece el ejercicio periodístico, la industria del ‘chuponeo’ prolifera. Cuando se cerró el SIN montesinista no se encontraron equipos de interceptación telefónica, aunque sí se confirmó que

alguien robó unas 16 máquinas de ese tipo. Hoy, según el vicepresidente Luis Giampietri, unas 10 empresas hacen interceptación ilegal incluso satelital. Es decir, sofisticación ante la cual ningún ciudadano puede protegerse.

¿Qué hacer? Es remoto dar una receta, pero listemos lo obvio: el delito debe investigarse ya (sin el peloteo de si le corresponde a la fiscalía o al Congreso); la prensa debe seguir métodos éticos y decentes; y nadie debe olvidar que, por encima de cualquier norma deontológica, la Constitución protege el derecho a la privacidad de las comunicaciones. ■■